

AGUA

EL ENÉSIMO ACUERDO POR EL AGUA

REDACCIÓN / TOLEDO

La pasada semana la Junta presentaba el borrador de su pacto regional por el agua, consensuado con las principales organizaciones sociales y que ahora se quiere abrir a los partidos políticos. Un documento que apunta alto -limitar los trasvases solo al consumo humano y a momentos de necesidad real-, pero que no es, ni mucho menos, el primer intento de cerrar un gran acuerdo en torno al agua en Castilla-La Mancha.

La lucha viene de lejos. Para el acuerdo quedan las batallas a cuenta del Tajo-Segura entre el expresidente Bono y el por entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell. Ya en

truir un trasvase desde el Ebro con el que aliviar al Tajo y soluciones para los pozos ilegales del Alto Segura.

Pero salvo la barrera, ninguna de las otras dos cuestiones llegaron nunca a solventarse. La entrada de Zapatero en 2005 a la Moncloa trajo consigo la derogación del PHN de 2001. Huérfanos de Ebro, se retornó a la idea de que Castilla-La Mancha necesitaba grandes pactos por el agua.

El primero de ellos se firmó hace ya más de una década, en 2006. Fue el llamado 'Pacto de Fuensalida', sellado por el entonces presidente regional, José María Barreda, y el líder de la oposición, el 'popular' José Manuel Molina, hoy caído en desgracia.

Sin embargo, y aunque de las Cortes regionales terminó saliendo en 2008 una propuesta de reforma del Estatuto que marcaba la caducidad del trasvase en el ya citado año 2015, las cosas se torcieron al llegar a Madrid. Su periplo en el Congreso durante cerca de dos años fue la crónica de una muerte anunciada. En el PP nacional, con Cospedal ya de secretaria general, la postura valenciana y murciana ganó de calle. Y en el PSOE de Zapatero tampoco estaban por la labor de enfrenarse más con el Levante, ya airado por el fiasco del trasvase del Ebro.

De nada valieron las sucesivas rebajas planteadas por Barreda, que trató de cambiar la caducidad del

misión Constitucional del Congreso.

Mientras esto pasaba en Madrid, en parte de la sociedad de Castilla-La Mancha renacía un el sentimiento de agravio parecido al vivido en los noventa del siglo pasado. Fueron los años de la Mesa del Agua, que logró congregarse a los principales agentes sociales y económicos de la región contra el trasvase. Una postura que les costó a muchos ser llamados por la oposición 'popular' «los abajo-firmantes» del PSOE y que les pasó factura durante la legislatura siguiente, ya con Cospedal como presidenta de la Junta. De aquellos años es el lema 'Agua para todos sí, para todo no', que encabezó alguna que otra manifestación en contra del trasvase.

ces gravemente dañado en su cuenca media por la falta de agua. Sin embargo, la victoria de Cospedal en las autonómicas de ese año, y meses después la de Rajoy en las generales, acabaron con cualquier posibilidad de futuro de esta ley, posiblemente la más breve de todas aquellas que han salido del parlamento autonómico.

Sería injusto decir que toda la 'guerra del agua' de Barreda fue un fracaso. En 2005 Castilla-La Mancha consiguió firmar un acuerdo histórico con el Gobierno de Zapatero. Por primera vez se habló de la prioridad de la cuenca cedente y del derecho de Castilla-La Mancha a usar el agua del trasvase. Sería a través de la la-

canal del trasvase Tajo-Segura

aqueños años el jefe del Ejecutivo autonómico advertía de que Castilla-La Mancha no daría «ni una gota de agua» más para los regadíos del Levante, llegando a organizar pequeños 'motines' dentro del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, donde a los diputados por la comunidad en más de una ocasión les tocó nadar entre dos aguas.

Uno de esos momentos tuvo lugar en 1995, en pleno debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, cuando Bono y los diputados castellano-manchegos montaron una reunión semiclandestina -Almunia no les dejó verse en el Congreso- y plantearon un 'pacto por el Agua' donde se exigía «agua para beber en Castilla-La Mancha» y no para «regar en Alicante y Murcia». Un año antes Bono ya había mandado 20.000 cartas a representantes de distintos colectivos de la región -médicos, abogados y otros profesionales- y a todos los alcaldes pidiendo apoyos contra el Tajo-Segura.

No obstante, el 'campanazo' total lo dio cuando en el 2001 se saltó a la torera las prescripciones socialistas y junto a su homólogo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, votó a favor del Plan Hidrológico de Aznar. ¿Las razones? Básicamente tres: el reconocimiento de una barrera en los pantanos de cabecera del Tajo a partir de la que no se podría trasvasar ni una gota de agua (240 hectómetros cúbicos), la promesa de cons-

La Junta de Comunidades presentó la pasada semana el borrador de su propuesta de pacto regional por el agua, pero no es ni mucho menos el primero. En las últimas décadas el agua ha protagonizado manifiestos, memorándums, mesas, plataformas, reformas fallidas del Estatuto de Autonomía, leyes que nunca llegaron a entrar en vigor, acuerdos y desacuerdos con el Gobierno central... Y es que, medio siglo de trasvase al Segura dan para mucho

Un texto en el que se comprometían a llevar a cabo una reforma pactada del Estatuto de Autonomía que incluyera el reconocimiento del déficit hídrico regional.

Palabras que apenas un año después se concretaron en la fijación de una fecha de caducidad para el trasvase por primera y de momento única vez en la historia. Era el entonces lejano año 2015 y lo firmaba por el PP una casi desconocida María Dolores de Cospedal, casi recién llegada a la presidencia del PP regional.

trasvase por una reserva hídrica regional a la manera que lo había resuelto el Estatuto aragonés y sacó el agua del articulado del Estatuto para llevárselo al Preámbulo, convirtiendo las demandas castellano-manchegas en meras declaraciones de intenciones. Pero ni con esas logró romper el muro levantado por los lobbies murcianos y valencianos y la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha terminó volviendo a casa en 2010, sin haber conseguido si quiera pasar de la Co-

El último intento, fallido también, de Barreda de trasladar a Madrid el debate sobre el agua fue la llamada Ley del Agua de Castilla-La Mancha, aprobada en el último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de la legislatura 2007-2011. Un texto que fue elevado también al Congreso y donde se reclamaba, ahora vía ley, una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha y el compromiso de garantizar las condiciones medioambientales del Tajo, ya enton-

mada 'tubería manchega', infraestructura que la crisis ha dejado a medias, y de una serie de obras en urgencia en el Segura, el Júcar y el Guadiana. En total, se preveía una inversión de 2.000 millones.

Con la llegada de Cospedal a la Presidencia de la Junta todo cambió. Se acallaron las críticas del Gobierno regional al trasvase y en 2013 Castilla-La Mancha firmó el que se llama Memorándum del Tajo con Madrid, Extremadura, Valencia y Murcia, todas ellas comunidades gobernadas por el PP en esos años.

Un memorándum con luces -se elevaba la barrera no trasvasable de agua de Bono a los 400 hectómetros cúbicos-, pero también con muchas sombras, entre ellas la de convertir los trasvases en una ley y, *de facto*, en un mero trámite administrativo que se aprueba mes a mes mientras haya agua en Entrepeñas y Buendía.

Con todo, en estos momentos de 'transición ecológica' serían cuatro los grandes objetivos a conseguir a corto plazo por Castilla-La Mancha: convertir los trasvases en 'apoyos' de las desaladoras, y no al revés como hasta ahora, limitarlos al consumo humano, conseguir voz y voto para la región en los órganos de gestión del agua y, sobre todo, dinero para poner en marcha infraestructuras que lleven agua en cantidad y calidad a todos los puntos de la comunidad. Se verá.